

RIT N° : S-17-2023
RUC N° : 23-4-0465026-2
MATERIA : PRACTICA ANTISINDICAL
DEMANDANTE : DIRECCIÓN DEL TRABAJO- INSPECCIÓN
PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO
TERCERO COADYUDANTE : SINDICATO DE EMPRESA SONORAD II
S.A.
DEMANDADO : SONORAD II S.A.

Santiago, dos de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció al proceso Guillermo Reyes Arredondo, en representación de la **DIRECCIÓN DEL TRABAJO- INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO**, con domicilio en Moneda N° 723, comuna de Santiago, quien interpone demanda por práctica antisindical en contra de **SONORAD II S.A.**, representada legalmente por Pedro Montero Castañón, ambos domiciliado en calle Libertador Bernardo O'Higgins N° 1529, comuna de Santiago, a fin de que se declare que la denunciada ha incurrido en prácticas antisindicales consistente en el no otorgamiento del trabajo convenido a los dirigentes Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, Presidente y Tesorera del Sindicato De Empresa Sonorad II S.A. y se ordene que de persistir el comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del fallo, su cese inmediato, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492 del Código del Trabajo, además de la indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales señalados, en este caso se le otorgue el trabajo convenido a los dirigentes Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, o bien, acordar junto al trabajador la realización de una labor similar a la que ha venido desempeñando bajo apercibimiento contemplado en el inciso 1° del artículo 492 del Código del Trabajo, incluidas las indemnizaciones que procedan y se le condene al pago de una multa equivalente a 300 Unidades Tributarias



Mensuales, o lo que el Tribunal estime pertinente en justicia, según lo dispone el artículo 292 del Código del Trabajo, la que se podrá duplicar o triplicar según lo estime S.S., atendido el artículo 506, inciso 5º, del Código del Trabajo y que se remita copia de la sentencia condenatoria a la Dirección del Trabajo para su registro y oportuna publicación, con costas.

Indica que los dirigentes Sr. Robinson Vera Ahumada y Sra. Alejandra Vargas Vargas, fueron contratados bajo vínculo de subordinación y dependencia, con fecha 02.11.2015, en calidad de “Jefes de Cajas y Tesorería” y de “Jefe de Sucursal y Cajas”, respectivamente, por la empresa Sonorad II S.A.

Señala que el Sindicato De Empresa Sonorad II S.A., RSU 1301.3118, se encuentra legalmente constituido con fecha 23.04.2007 y tiene su personalidad jurídica vigente, la que obtuvo por el depósito de los estatutos el día 24.04.2007, fueron electos por el período 11.07.2019 al 11.07.2023, los dirigentes sindicales mencionados Sr. Robinson Vera Ahumada y Sra. Alejandra Vargas Vargas, además del Sr. Daniel Edmundo Núñez Faúndes, en calidad de secretario.

Explica que con fecha 27.01.2023, los dirigentes del sindicato aludido, denunciaron ante este Servicio, el no otorgamiento del trabajo convenido, desde el 30.11.2022, tras el cierre de la sucursal donde trabajaban, lo que se fiscalizó en la comisión N° 1322/2023/452, en Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, efectuada por la funcionaria de este Servicio, doña Cristina Celis Díaz.

Sostiene que la citada fiscalización finalizó, constatando la práctica antisindical, y allanándose el empleador a su corrección, lo que da cuenta el Informe respectivo, expresado de la siguiente manera: “Que según consta en declaración jurada prestada por el empleador, a través de su representante Sr. Cristobal Torrealba del Río, con fecha 02.02.2023; además según minuta de reunión bipartita de fecha 01/02/2023; y finalmente de acuerdo al mérito de los correos electrónicos enviados por la empresa denunciada a la directiva sindical denunciante, se confirma por quien suscribe que la empresa SE ALLANA a otorgar el trabajo convenido a los denunciantes, esta vez, en la sucursal ALAMEDA, ubicada en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1529, comuna de Santiago, para lo cual, los tres dirigentes deben presentarse el día Lunes 6



de febrero de 2023 en dicha instalación, con el objeto de hacer efectivo lo señalado precedentemente, al encontrarse habilitados sus puestos de trabajo”.

Posteriormente expresa, con fecha 21.02.2023, los dirigentes del Sindicato De Empresa Sonorad II S.A., RSU 1301.3118, interpusieron nuevamente denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, en los siguientes términos:

“Somos dirigentes sindicales e interpusimos denuncia por no otorgar el trabajo convenido, N°1322.2023.452, la que finalizó con acuerdo de las partes de que se tendrían que reintegrar a sus funciones en la sucursal de la Alameda el 6 de febrero de 2023. Al intentar asumir sus funciones en la nueva sucursal asignada, encontramos que no tenemos claves de acceso, no podemos realizar funciones debiendo deambular por los pasillos.”

Indica que a fin de verificar los hechos denunciados, se procedió a ingresar comisión bajo el N° 1301/2023/818, constituyéndose la fiscalizadora actuante Sra. María Paz Peña Hernández, en la empresa Sonorad II S.A. Agrega que en la visita inspectiva, mediante la revisión de la documentación laboral pertinente, además de entrevistas al empleador y a la parte denunciante; se constataron los siguientes hechos:

Manifiesta que en primer término, la fiscalizadora actuante constata la calidad de dirigentes sindicales de los denunciantes conforme al sistema informático de Dirección del Trabajo.

Refiere que según da cuenta el Informe respectivo, de acuerdo a la revisión de los contratos de trabajo, se verifica que don Robinson Vera Ahumada ingresó a la empresa con fecha 14.10.2002, laborando en el cargo de Jefe de cajas, desde el día 01.01.2019, según consta en anexo de contrato. Por otro lado, doña Alejandra Vargas Vargas ingresó a la empresa con fecha 24.09.2001, desempeñándose en el cargo de Jefe de sucursal desde el día 01.01.2019 según consta en anexo de contrato. Finalmente, don Daniel Núñez Faúndez ingresó a la empresa con fecha 01.06.2004, ejerciendo como Técnico de Radiología con fecha 01.05.2011, conforme consta en el respectivo anexo de contrato.

Alega que de acuerdo a las entrevistas practicadas, los dirigentes de forma efectiva desempeñaban las funciones descritas en la sucursal de



Huérfanos (actualmente cerrada), compartiendo la Sra. Alejandra Vargas las funciones de Jefe de Cajas con don Robinson Vera.

Hace presente que en el descriptor de cargo correspondiente a la función de Jefe de Cajas, se indica lo siguiente: “controlar de manera constante la operación de las cajas, asegurando la calidad de los registros y la recaudación de los valores obtenidos (tanto en dinero como documentos) a fin de evitar pérdidas y consolidar los ingresos del centro”.

Establece que señala el Informe respectivo, que en el caso de los trabajadores Sra. Alejandra Vargas y Sr. Robinson Vera, al momento de la visita no contaban con un puesto de trabajo habilitado para ellos, a su disposición, toda vez que “en la oficina de Tesorería existe espacio solo para una persona, siendo el lugar de trabajo del Tesorero vigente en la sucursal desde antes del cierre de la sucursal de Huérfanos, y además, ya que la oficina mostrada por la Cajera que atiende a la suscrita, se encontraba cerrada con llave y los dirigentes no contaban con una copia de ellas. Además, no había luz eléctrica y los accesos de los computadores estaban limitados”.

Menciona que también indica dicho documento que la fiscalizadora actuante, que el trabajador que ejerce como el Tesorero y Jefe de Cajas actual de la sucursal, declaró que “las funciones relacionadas al control y manejo del dinero, labor básica dentro de las funciones de los dirigentes, sigue siendo gestionada únicamente por él.

Expone el Informe precisa, que las cajeras no reconocen a los dirigentes como jefaturas e indican que ellos no les prestan la asistencia propia de la jefatura de cajas o tesorería.

Narra que también señala que la funcionaria, que el propio empleador reconoció, que sólo ha asignado labores en forma limitada o parcial, sin otorgarles las tareas de manejo de dinero, asistencia a las cajeras, responsabilidades de jefatura, entre otras, las que forman parte esencial de sus cargos.

Advierte que asimismo agrega que los trabajadores tienen una remuneración (total de haberes último periodo) de 1.261.480 pesos en el caso del Sr. Robinson Vera y 1.824.349 pesos respecto de la Sra. Alejandra Vargas.

Razona que precisa la funcionaria de este Servicio, que en relación al dirigente Daniel Núñez, al momento de la fiscalización se encontraba haciendo



uso de feriado legal, por lo que no pudo verificarse sus condiciones laborales en la sucursal Alameda.

Señala que concluye el informe respectivo, que “se constataron indicios suficientes de la vulneración de derechos fundamentales denunciada, esto es no otorgar la labor convenida de Jefes de Cajas y Tesorería, respecto del dirigente Robinson Vera y Jefe de Sucursal y Cajas en el caso de Alejandra Vargas, a contar del día 06.02.2023, fecha en la cual según Ordinario 82, la empresa se comprometió a habilitar sus puestos de trabajo y asignar sus funciones en la Sucursal Alameda, en anterior comisión”.

Siguiendo con el procedimiento administrativo expone, requerido el empleador a la corrección de la vulneración detectada, no se allanó, declarando que, “que no es factible eliminar el sistema de supervisión central implementado en la empresa en el marco de la modernización de los sistemas de trabajo, y tampoco pueden desvincular o separar al trabajador vigente en el cargo, ya que esto implicaría un menoscabo de sus condiciones laborales. Por lo que se allanan de forma parcial, indicando que pueden asignarles sólo parte de las tareas administrativas del cargo”.

Dice que por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el 6º inciso del artículo 486 del Código del Trabajo, se citó a las partes a la correspondiente mediación, en Oficinas de este Servicio.

Sostiene que con fecha 03.03.2023, en dependencias del Centro de Conciliación y Mediación Santiago Poniente, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 6º del Artículo 486 del Código del Trabajo, se llevó a efecto audiencia de mediación, asociada a la comisión N° 1301/2023/818, compareciendo la parte denunciante Sindicato de Empresa SONORAD II S.A., RSU 1301.3118, representada por los dirigentes señores Robinson Vera Ahumada y Daniel Núñez Faúndes.

De igual manera expresa, concurrió a la citación la empresa Sonorad II S.A., por medio de su representante legal Sr. Pedro Montero Castañón, premunido de poder suficiente.

Indica que en dicha instancia, previa lectura del Informe de Fiscalización respectivo, ante el requerimiento efectuado en orden a corregir la contravención detectada, el empleador no se allanó, declarando únicamente que: “las vulneraciones no existirían”.



Manifiesta que atendida la manifestación de la empleadora, se puso fin a dicha instancia administrativa, sin acuerdo de las partes, procediendo la denuncia de los hechos expuestos ante el Tribunal del Trabajo.

Refiere que en conformidad lo ha resuelto la Jurisprudencia del Trabajo, entre otros en sentencia dictada por doña Lorena Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa RIT S-19-2010, considerando décimo segundo, "... el artículo 292 del Código del Trabajo establece que el conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustancian conforme a las reglas del procedimiento de tutela, teniendo aplicación plenamente lo dispuesto en el artículo 493 del citado cuerpo legal, esto es que "cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad". De lo cual se concluye que la prueba que se impone a la parte denunciante, como exigencia mínima probatoria, es aportar antecedentes que constituyan indicios suficientes de la ocurrencia de los hechos que se denuncian como constitutivos de la práctica antisindical que se imputa, correspondiéndole acreditar o explicar a la denunciada -cumplida la exigencia antedicha por el denunciante- la justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas".

Alega que al respecto es necesario señalar que la presente denuncia contiene indicios suficientes de la vulneración denunciada, entendidos como "hechos que han de generar en el juzgador al menos la sospecha fundada de que ha existido lesión de derechos fundamentales", los que se pasan a señalar.

A) Don Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, tiene la calidad respectivamente de Presidente y Tesorera del SINDICATO DE EMPRESA SONORAD II S.A., RSU 1301.3118 y por ende, se encuentran amparados por fuero sindical.

B) Que mediante fiscalización a cargo de la Sra. María Paz Peña Hernández, ministro de fe de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, se constató que la Empresa SONORAD II S.A., no les está otorgando el trabajo convenido a los dirigentes aludidos.



C) Que la fiscalizadora actuante requirió a la empresa a reintegrar a los trabajadores a sus laborales habituales, otorgándole la función y la empresa no se allanó y ante la negativa se citó a las partes a una mediación.

D) Que, con fecha 03.03.2023, se llevó a cabo audiencia de mediación entre las partes, con el objeto de obtener la corrección de la vulneración constatada, sin haber concluido en forma positiva, dado que la empresa denunciada no se allanó a poner término a su conducta ilegal.

Hace presente que cabe indicar que el Art. 7º del Código del Trabajo, dispone que: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”

Del precepto anotado establece, que define el contrato de trabajo, se infiere que dicho contrato es un contrato bilateral que genera obligaciones para ambas partes. Tratándose del empleador, estas obligaciones consisten fundamentalmente, en proporcionar al trabajador, el trabajo convenido y en pagar por ese trabajo la remuneración estipulada, y tratándose del trabajador su principal obligación consiste en ejecutar la labor o servicio para el cual fue contratado.

Menciona que de lo precedentemente expuesto resulta dable colegir, que el hecho de que el empleador no otorgue ninguna función al trabajador, constituye un incumplimiento de parte de aquél, de la obligación fundamental que le asiste de proporcionar el trabajo convenido.

Precisa que cabe señalar que la denunciada, intenta justificar su actuar señalando que no existe vulneración, sin embargo, la asignación de labores a los dirigentes afectados fue sólo limitada y parcial, lo que fue reconocido por el propio empleador, constatando la fiscalizadora actuante de IPT Santiago, que no se otorgaron tareas de manejo de dinero, asistencia a las cajas, responsabilidades de jefatura, entre otras, las que forman parte esencial de sus cargos.

A mayor abundamiento narra, en fiscalización previa de ICT SANTIAGO ORIENTE, por idéntica materia, realizada por la fiscalizadora doña Cristina Celis Díaz, se allanó la empresa ante este Servicio, a reincorporar a los trabajadores aludidos en la labor convenida, esta vez, en la sucursal Alameda,



ubicada en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1529, comuna de Santiago, lo que consta en Informe comisión 1322/2023/452, constituyendo un incumplimiento a lo comprometido por el empleador en dicha oportunidad.

Advierte que con todo, a la fecha la denunciada ha optando por persistir en la conducta ilegal y vulneratoria de derechos, manteniendo a los trabajadores sin asignación de las tareas fundamentales de sus cargos.

Razona que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292, inciso 5°, del Código del Trabajo, la Inspección del Trabajo debe denunciar al Tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales de los cuales tome conocimiento. Por su parte, el inciso tercero de la misma norma establece que el conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme a las normas que regulan el Procedimiento de Tutela.

En esta presentación señala, se han descrito hechos que dan cuenta de conductas atentatorias contra la Libertad Sindical cometidas por la denunciada en contra de los dirigentes Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, Presidente y Tesorera del SINDICATO DE EMPRESA SONORAD II S.A. RSU 1301.3118; hechos que al ser constatados por las fiscalizadoras actuantes y expuestos en los Informes de Fiscalización N° 1301/2023/818 y 1322/2023/452; gozan de presunción legal de veracidad establecida en el artículo 23 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial.

Expone que corresponde a continuación dar cuenta de cómo tales hechos constituyen un atentado en contra de la libertad sindical, sancionado por nuestro ordenamiento jurídico y disponiendo el mismo la obligación de la suscrita, en atención a mi calidad de Inspectora Provincial del Trabajo, de denunciar al tribunal competente los mismos para su sanción y pronta reparación de los dañinos efectos que provoca en tal libertad.

Dice que la Constitución Política de la República en el artículo 1° inciso 3° establece que "El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos." A su vez, en el artículo 19 N° 19 dispone: "La Constitución asegura a todas las personas: N° 19 El



derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. (...) La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones.”

Sostiene que cabe señalar que el contenido de tal garantía constitucional, debe entenderse enriquecido con lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución, que dispone: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Explica que la significativa importancia para la actividad de toda organización sindical del derecho a elegir sus propios dirigentes, se refleja, en el marco de los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) de la siguiente manera:

Indica que el Convenio N°98, promulgado mediante el Decreto N°227 publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1999 y vigente desde el 01 de enero de 2000, dispone, en su artículo 1° y 2° parte inicial letra b): “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical...”

Manifiesta que por su parte el Convenio N° 135 de 23 de junio de 1971, sobre Representantes de los Trabajadores, ratificado por Chile el 13 de septiembre de 1999, promulgado mediante el Decreto N° 649, publicado en el Diario Oficial el 29 de julio de 2000, establece en su artículo 1: “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dicho representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor”.



A su vez refiere, el artículo 2 N°1 agrega que “Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa se las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones”.

Alega que fiel al reconocimiento y consecuente protección que nuestra Carta Fundamental hace de la libertad sindical, en la manifestación de ésta que nos ocupa, se ha contemplado el fuero sindical como forma de tutelar la actividad sindical, establecido en los artículos 243 y 174 del Código del Trabajo, al proteger a los directores sindicales de despidos arbitrarios y de modificaciones unilaterales en sus contratos individuales, al establecer que los directores sindicales gozarán de fuero laboral desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en sus cargos, cumpliéndose los requisitos que la misma norma prescribe, la cual, además, agrega que el empleador no podrá en el mismo período indicado, ejercer respecto de tales trabajadores las facultades del artículo 12, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Por su parte, el artículo 174 ya citado, prescribe que a los trabajadores protegidos por el fuero laboral, el empleador no podrá poner término a sus contratos sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla sólo en los casos que el mismo artículo establece.

Hace presente que el artículo 243 del Código del Trabajo establece que: “Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en la legislación vigente, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por la censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deban hacer abandono del mismo, o por término de la empresa. Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, el empleador no podrá, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores sindicales las facultades que establece el artículo 12 de este Código”.

Establece que de las normas señaladas precedentemente, se concluye que el legislador otorga protección a los representantes de los trabajadores mediante el fuero sindical, a lo que debe sumarse como mecanismo de protección a la libertad sindical, las normas del Capítulo IX del Título I del Libro III del Código del Trabajo que sanciona las prácticas antisindicales o atentados



en contra de la libertad sindical entre los que se encuentra la separación ilegal de un dirigente sindical.

Menciona que por su parte cabe señalar que el legislador ha establecido ciertas conductas que son consideradas como prácticas antisindicales en los artículos 289 y siguientes del Código del Trabajo, al respecto, tanto la doctrina como jurisprudencia, ha sostenido que dichas conductas son meramente enunciativas y basta con que las conductas o actos que se ejecuten vulneren la libertad sindical, para estar en presencia de prácticas antisindicales. Lo anterior queda perfectamente claro del tenor literal de los artículos 289, 290 y 291 del Código del Trabajo, que señalan, en términos totalmente amplios que las prácticas antisindicales o desleales son aquellas acciones que atentan contra la libertad sindical, sin señalar que las conductas que se indican posteriormente sean una especie de tipificación o enumeración taxativa, lo que se aprecia claramente al inicio de cada una de dichas normas.

Sin perjuicio de ello precisa, en la especie, los hechos debidamente constatados en el marco de la fiscalización efectuada, igualmente son susceptibles de encuadrar en la causal no taxativa de las letras A y F del artículo 289 del Código del Trabajo, pues se verifica una discriminación indebida en contra de la dirigente sindical afectada al no proporcionar la labor convenida en el contrato de trabajo.

Narra que todos estos hechos que fueron constatados por la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, gozan de presunción legal de veracidad establecida en el artículo 23 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial.

SEGUNDO: Que contestando derechamente la demanda la demandada solicitó su rechazo, con expresa condenación en costas.

Fundando lo anterior advierte que antes de empezar, quisiera denunciar la absoluta falta de prolijidad de la presente demanda. Añade que no solo dicen en lo que se va a exponer sobre el derecho, lo cual merece su propio comentario; sino en los hechos. Agrega que resulta sorprendente como se ha presentado esta demanda en un estado donde hay fechas incorrectas, nombres incorrectos, se confunden las cosas que pasaron y esto no lo dicen en el sentido de que siempre existirán legítimas diferencias entre los relatos de las



partes: la demanda no se condice con los propios documentos de la Dirección del Trabajo, incluyendo el informe de fiscalización y las actas formalizadas.

Razona que desconocen exactamente porque se presentó la demanda en ese estado.

Señala que los puntos a los que se refiere son los siguientes:

a) Sobre la primera fiscalización: N° 1322/2023/452:

Expone que el informe de exposición señala que con fecha 20 de diciembre de 2022, Don Robinson Vera Ahumada, Presidente del Sindicato de Empresa Sonorad II S.A., interpuso denuncia por prácticas antisindicales que abarcaba según indican, la forma en que se ejecutó el cierre de sucursales, la supuesta prohibición de uso de horas sindicales, el cierre de las oficinas destinadas al sindicato, el derecho adquirido respecto de esta oficina, y finalmente no otorgar el trabajo convenio de acuerdo a sus contratos individuales. La demanda agrega, sin embargo, indica sobre esa fiscalización que se trataría de una denuncia realizada por dirigentes sindicales el 27 de enero de 2023, es decir un mes después de lo indicado en el propio informe y que ella se habría centrado únicamente en el no otorgamiento del trabajo convenido.

Dice que omitiendo que respecto de las demás alegaciones no solo no existía antecedente alguno, sino que la propia entidad ha resuelto el 24 de abril de 2023, que sobre la disposición de las oficinas destinadas al sindicato, no existen siquiera indicios de vulneración.

Así mismo sostiene, y sobre la posición de la empresa en esta primera fiscalización, es absolutamente falso que la empresa reconociera la existencia de una práctica antisindical, pues la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos y no supone el reconocimiento de hechos, y en dicho tenor además es que se realizó por parte de la empresa la declaración, a través de Cristóbal Torrealba, quien, en un relato extenso entregó la cronología de hechos y puntualizó elementos relevantes que han sido omitidos:

1) informó que después del cierre de la sucursal en el que fueron desvinculados todos los trabajadores – salvo los dirigentes sindicales- se les consultó a los denunciante en que sucursal querían prestar servicios, sin obtener respuestas, sino hasta el mes de enero de 2023, que indicaron que querían integrarse a la sucursal Alameda.



2) Durante todo el tiempo, los dirigentes han recibido el pago íntegro de su remuneración y además, han hecho uso de las oficinas del sindicato que estaban en la sucursal de Huérfanos, lo anterior incluso hasta vencido el plazo para hacer entrega del inmueble a su propietario en marzo 2023.

3) Que la empresa mantuvo contacto constante con los dirigentes para coordinar su reintegro en la sucursal de alameda.

4) Que la empresa, ante la solicitud de establecer una fecha para ellos se reintegren en la nueva sucursal, se encontraba llana.

5) Que la declaración del punto anterior se hacía a solicitud de la mediadora.

Expone que la demanda, tergiversa lo indicado por la empresa, y pretende exponer al tribunal que la empresa reconoció la existencia de una práctica antisindical, cuando en los hechos, lo único que se realizó fue mantener la misma disposición al diálogo que mantuvo con los dirigentes en virtud de la cual se les ofreció formal, ente que informaran a que sucursal querían trasladarse y que mientras definían ello seguirían gozando de sus remuneraciones en forma íntegra y luego coordinar una fecha para su reintegro en la sucursal, sucursal que ellos - los dirigentes - determinaron casi 2 meses después del cierre de la sucursal en la que prestaron servicios.

b) Sobre la segunda fiscalización N° 1301/2023/818

Indica que la demanda indica que el 21 de febrero de 2023 se interpuso una denuncia, bajo el N° 1301/2023/818, en tanto el informe de exposición refiere que la denuncia sería de fecha 15 de febrero de 2023, lo que es más grave aún, indica la demanda que acudió a la mediación en representación de la empresa Pedro Montero, en circunstancias que el informe indica que quien concurre es doña Silvana Plaza y que se entrevista además a Daniela Zegers, es decir, don Pedro Montero jamás declaró en la fiscalización.

Estos errores manifiesta, que de tan repetitivos parecen más desidia que errores de tipeo, resultan relevantes si además consideramos que no solo se han tergiversado las declaraciones de la empresa o confundido el nombre de sus representantes, sino que además se ha omitido de forma antojadiza todas las explicaciones y relatos que entregó la empresa, limitando sus declaraciones y sacándolas de contexto.



Refiere que la pregunta que debe hacerse va un poco más allá de una alegación de falta de cuidado; sino en preguntarse en qué manera la parte contraria pretende invocar la presunción de legalidad (que es siempre distorsionable) cuando los propios hechos de la demanda no se ajustan a lo fiscalizado.

Finalmente alega, lo anterior no solo implica un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 446 N°4 del Código del Trabajo, que exige perentoriamente la exposición clara y circunstanciada de los hechos en que se funda la demanda, sino que además tal deficiencia argumentativa, provoca la afectación del derecho a defensa de esta parte y afecta la actividad probatoria de la demandante, pues si se entiende esta como una actividad cuyo objeto es la comprobación del relato de los hechos de la demanda, esta se torna en una labor ineficaz cuando ellos son expuestos de manera insuficiente, como ocurre en la especie.

En cuanto a la cronología real de los sucesos ocurridos hace presente lo siguiente:

a) Sobre el cierre de las sucursales

Que establece, expuesto lo anterior, cabe realizar una presentación de la forma en como realmente ocurrieron los sucesos que culminan en la denuncia.

Menciona que primero, es efectivo que la empresa se hubiera visto en la necesidad de imperiosa de cerrar determinadas sucursales de la empresa. Añade que a modo de contexto; Sonorad es una empresa que otorga prestaciones en el área de salud, mediante la realización de exámenes, servicios de imagenología, entre otros. Lo anterior agrega, sin ánimo de entrar a discutir los despidos por necesidades de la empresa y solo para contar con todos los antecedentes, luego de que la empresa presentara pérdidas durante todos y cada uno de los años, desde el año 2018 al 2022.

Precisa que existen varias razones para explicar esto, desde los tipos de categorías Fonasa que se atienden; el ajuste de precios que viene dado por arancel Fonasa no se ajusta de forma idéntica o inmediata al IPC; un incremento en el valor de los insumos, etc... pero principalmente, debe considerarse que dos de las sucursales más grandes de la empresa, las denominadas sucursales de “Bellotas” y “Huérfanos”, presentaban un fuerte



descenso de afluencia de pacientes, muy en particular desde fines de año 2019.

Narra que este examen de antecedentes llevó a la lamentable y muy postergada decisión de cerrar estas sucursales y por ende una reducción de la empresa a su mitad.

Advierte que debe tenerse presente: esta decisión se tomó por razones absolutamente ajenas a las que se presentan en este juicio, y la restructuración en sí fue de proporciones mayores, a tal punto que en los cierres indicados se redujo la dotación de toda la empresa a la mitad, solo por el cierre de dichas sucursales. Insistimos: estas eran las sucursales más grandes de la empresa, esto no fue una decisión aleatoria sino derivada de una situación económica muy grave. Lo anterior añade, en la búsqueda de reducir gastos arriendos e insumos, y concentrar la operación en las sucursales restante.

Razona que ninguna de estas decisiones se tomó en consideración de la calidad de dirigentes sindicales de los tres trabajadores, y desde el principio, se respetó el fuero sindical de Robinson Vera Ahumada, Sra. Alejandra Vargas Vargas y Daniel Edmundo Núñez Faúndes. Agrega que estos tres trabajadores se desempeñaban en la sucursal de Huérfanos de la empresa. Además alega, se entregó todas las facilidades no solo para una transición, sino que sindical; para que operaran como trabajadores en otra sucursal distinta, además de buscar habilitarle un nuevo lugar que sirviera como sede. Expone que esto desde fines de Noviembre de 2022 cuando se les envió la cata informándoles del cierre de las sucursales.

Advierte que con fecha 20 de diciembre del año 2022, se envió una carta en la cual se les indicaba que debían entregar el inmueble de Huérfanos a más tardar el 31 de diciembre del año 2022, puesto que los dirigentes se negaban a trasladarse; siendo ya un plazo más que razonable (considerando además que el cierre en sí se había concretado el 30 de noviembre del año 2022). Agrega que acá es importante considerar que si bien puede ser comprensible la situación de frustración derivada del cierre de estas sucursales; el motivo por el cual existió un primer retraso fue en la negativa del sindicato a trasladarse; no siendo acá opcional permanecer en la sucursal de Huérfanos, dado de que el aviso de cierre había sido notificado al arrendador y era necesario devolver y desocupar el lugar.



Desde ya señala, dada la situación, y a fin de respetar lo más posible su libertad de trabajo, pero considerando desde el principio que el inmueble debía devolverse y que los trabajadores debían realizar sus funciones; la opción de elegir la sucursal que más les acomodare tanto para ejercer sus funciones como para el desarrollo de su labor sindical. Agrega que los dirigentes desde un principio manifestaron sendas objeciones a esto, lo que obstaculizó en suma manera aplicar las medidas correspondientes.

Es del caso explica, además, que se entregó todas las facilidades correspondientes dado que algunos de los cargos ya no existían, y sin embargo, se habilitó las facilidades para que se siguieran ejerciendo.

Finalmente dice, en comité bipartito del 4 de enero del año 2023, finalmente los dirigentes decidieron reintegrarse en la sucursal de Alameda, y que necesitaban que se les habilitara una oficina. Añade que en esta reunión se accedió a ello por parte de la empresa y que se les informaría para su traslado dado que había que hacer algunas readecuaciones para recibir a los dirigentes, como por ejemplo habilitar los sistemas en dichas sucursal para ellos, resolver el espacio donde se ubicarían ya que la sucursal se encontraba con su dotación completa y además la empresa debía habilitar una oficina privada para que la puedan usar como oficina sindical.

Sostiene que cabe exponer sobre la oficina nueva de sucursal Alameda para el uso del sindicato, esta se trata de una oficina amplia de aproximadamente 12 metros cuadrados (más grande que la anterior), tiene luces LED, ventanal luminoso y bastante amplio, impresora, 2 computadoras, dos sillas ejecutivas, una silla adicional para paciente, dos escritorios, un lavamanos, aire acondicionado, dispensador de jabón y toalla de papel, todo lo cual está disponible al Sindicato. Planteamos esto, dadas las objeciones que planteó el Sindicato durante enero, dado que a pesar de ser en muchas maneras una oficina mejor adecuada que la oficina original de Huérfanos, el Sindicato se negaba a recibir esta; atendido que requerían una oficina idéntica a la presentada.

Expone que sin perjuicio de ello sobre esta materia en particular, la denunciante ya se pronunció en otro proceso de fiscalización señalando que no hay indicios de vulneración alguna en lo que a la oficina o sede sindical se refiere, como se expondrá.



b) Sobre las denuncias.

Indica que esto llevo a una denuncia por parte del Sindicato, de acuerdo con lo que consta en informe, alegando una práctica antisindical por lo descrito. La denuncia contiene hechos claramente falsos; tales como una mención a que la empresa no les otorgaría el trabajo convenido a menos que los trabajadores renunciaren a las horas sindicales, lo cual evidentemente jamás ocurrió; ni tampoco aparecen así presentados en la demanda, pero que si aparece como relevante a la hora de preguntarse como la denuncia presentada es una práctica antisindical o no. Volveremos a este punto más adelante.

Manifiesta que desde ya, de la lectura de la demanda, resulta claro que el motivo de la demanda actual no es esta fiscalización, sino que nada más es un antecedente que debe considerarse a la hora de considerar la respectiva cronología.

Refiere que esta denuncia fue presentada el 20 de diciembre del año 2022; siendo solo derivada a la Inspección Comunal de Santiago Oriente el 18 de enero del año 2023.

Alega que se realiza una serie de visitas inspectivas los días 30 y 31 de enero, y finalmente, el día 2 de enero, se realiza una citación. Lo anterior, en todo caso, aparece de la declaración de abogado de la empresa; Cristóbal Torrealba del Río. Desde ya, como se ha expresado anteriormente, y como consta en el informe de investigación, no existe allanamiento por su parte a que hubiera una no entrega de trabajo convenido ni una práctica antisindical, y basta leer el propio informe que la contraria acompaña; en cuanto la empresa “es llana” (no se allana) al requerimiento de habilitar las oficinas para el día 6 de febrero del año 2023. Es del caso, como se ha dicho, que había habido una nueva sesión del comité bipartito el día 1º de febrero, donde se acordó esto. No existe agrega, en ninguna parte del acta, un “allanamiento” de la empresa; sino una clara manifestación de que el 6 de febrero del año 2023, la empresa tendría habilitada la sucursal para que los dirigentes volvieran a trabajar.

Hace presente que paralelo a todo esto; el 27 de enero de año 2023 se presenta una segunda denuncia por no entrega del trabajo convenido; esta, bajo la caratula de investigación 1322/2023/452 (que da origen a esta demanda).

c) Sobre el reintegro.



Ahora bien establece, es cierto que al arribar el día 6 de febrero del año 2023, al presentarse los trabajadores hubieran algunos problemas menores que fueron solucionados a la brevedad, como una impresora que no funcionaba por ejemplo. Esta situación fue aislada, menor, y en ningún sentido tiene el carácter que se pretende en la denuncia realizada. Añade que hubo un par de situaciones no previstas que se elevaron y se fueron acomodando, determinadas situaciones informáticas, etc. y todo lo descrito fue temporal, y no realizado con la intención de obstaculizar las funciones o labores de los trabajadores.

Menciona en cuanto a las denuncias que las labores no podrían prestarse; desde ya, debe observarse que ha debido adecuar las funciones de los trabajadores que para todo efecto deberían haber sido eliminadas junto al cargo anterior, a fin de que los trabajadores puedan seguir prestando servicios, y como se expondrá en el siguiente apartado; no basta simplemente con observar un listado de funciones en el descriptor de cargo y apuntar a algunas. Añade que debe considerarse la particular naturaleza de las funciones de los dos trabajadores que en este caso no se denuncian (el tercer dirigente es expresamente excluido de la demanda y el petitorio, por lo que no nos referiremos a él); esto es, Jefe de Sucursal y Jefe de Tesorería, cargos que presentaban un problema en particular.

Precisa que debemos retroceder en el tiempo para esto: el área de Tesorería de la empresa se había reestructurado hace dos años en todas las sucursales de la empresa, eliminando cargos y readaptándolos a fin de modernizar y agilizar los procesos.

Narra que este proceso se pudo llevar a cabo en todas las sucursales, salvo en una: la sucursal de Huérfanos de Sonorad. Lo anterior agrega, por un único motivo: los dirigentes sindicales se opusieron al proceso de modernización, y a las nuevas funciones y operación del cargo. Esto añade, ciertamente, puede considerarse una disputa válida; y valdría entrar a una discusión diversa sobre la misma; pero lo relevante es lo siguiente: trasladar a estos trabajadores, que operaban con este sistema y funciones antiguos, a una nueva sucursal, que operaba con el nuevo sistema de cajas, representó un problema mayor.

Esto advierte, en particular, considerando que la figura del Tesorero había asumido ya funciones en este sentido. Agrega que no era cosa de llegar



y poner estas dos funciones: adecuaciones debían realizarse para mantener la operación de la sucursal de Alameda, pero entregar funciones a los trabajadores y entregar el trabajo convenido; dentro de la nueva estructura.

Razona que es efectivo que se realizó una mediación al que fue citado de la empresa, donde queremos ser enfáticos, la empresa no se limitó a negar la existencia de una vulneración de derechos fundamentales; sino a exponer lo que ya hemos indicado hasta este punto. Agrega que sí nos resulta llamativo que la demanda se interpusiera al día siguiente, pues con unos días más de revisión quizás esto se habría asimilado a un texto jurídico real.

Finalmente señala, que la denuncia por estos exactos mismos hechos también fue revisado por la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente; determinó la no existencia de hechos vulneratorios de los derechos fundamentales, lo anterior de acuerdo a resolución en oficio ordinario 1300-10183/2023 del 26 de abril del año 2023.

Expone que por ahora, dejaremos de lado el problema de derecho que se expondrá sobre la invocación de una práctica antisindical en los hechos, y responderemos, a partir de lo expuesto, si la empresa actuó correctamente durante el curso de los hechos que se relatan. Agrega que debemos para ello resaltar que sin perjuicio de que la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago consideró la existencia, a partir de estos antecedentes, de una práctica antisindical; la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente opinó en forma diversa.

Entonces dice, lo primero que debe observarse es si existió algún incumplimiento en el hecho de cerrar la sucursal, y debe observarse que es claro que no es así, pues no es lo denunciado (al menos, no en esta demanda); pero es el necesario antecedente para determinar lo justificado o no de las medidas tomadas por la empresa, porque el asunto es el siguiente: el establecimiento donde se encontraban los trabajadores dejó de funcionar, por razones que son objetivas, graves y que se encuentran amparadas en el derecho.

Sostiene que si la empresa actuó correctamente en este lugar, es lógico entonces que los trabajadores en cuestión, amparados por el fuero sindical, no pueden seguir prestando servicio en ese lugar, y eso representaba el primer obstáculo: los trabajadores manifestaron sus objeciones en todo momento al



traslado, fundadas tanto en las condiciones de trabajo como en lo que ocurriría con su espacio para la operación del Sindicato. Ahora añade, desde ya los dirigentes pueden manifestar sus legítimas diferencias y proponer sus propias alternativas para alcanzar un remedio de la situación; pero este tribunal debe preguntarse si es legítimo denunciar que no solo no entregó el trabajo convenido, sino que aparentemente cometió una práctica antisindical, a pesar desde que desde el primer momento buscó alternativas (por que, evidentemente, no siendo este un inmueble de la empresa, la alternativa de permanecer en el lugar no era viable); y sin embargo, los dirigentes se opusieron a ello varias veces, como aparece claramente de los informes de fiscalización.

Expone que aparece también, como reconoce la propia demanda, que mi representada pagó íntegramente las remuneraciones de los trabajadores durante todo este tiempo; a pesar de que gran parte de la obstaculización venía de la negativa de los dirigentes a trasladarse a un nuevo lugar.

Indica que otro factor es que la empresa no tiene un número ilimitado de sucursales para reubicar a los trabajadores. Es, más bien, por el contrario, sumamente finito, cinco en la Región Metropolitana, y todo esto en un contexto de reducción de dotación. Agrega que la empresa naturalmente que a fin de entregar el trabajo convenido puede realizar las adecuaciones correspondientes; pero estas adecuaciones tienen un espacio limitado para realizarse, que si presentan obstáculos por el Sindicato se vuelven aún más complejos y acá insisten: el Sindicato tiene el derecho a oponerse; razón por la cual la empresa siempre procuró que la elección del lugar fuera del Sindicato, derivando en que estos eligieran, finalmente, la sucursal de Alameda.

Manifiesta que la situación central en todo caso parece dar vueltas en dos circunstancias:

- 1) El incidente del 6 de febrero del año 2023.
- 2) La denuncia sobre si determinadas funciones eran ejercidas por los trabajadores.

Refiere que sobre la primera circunstancia; que, si bien puede establecerse que ciertos puntos pudieron manejarse en mejor manera, esta circunstancias fueron breves y corregidas inmediatamente, y no fueron de la forma expuesta en los informes ni demanda. Agrega que la empresa realizó las



gestiones para habilitar la operación del Sindicato, tanto como trabajadores como en su calidad de dirigentes; en una sucursal distinta a la que operaban anteriormente, y eso requirió determinada coordinación que se fue ajustando con los días. Añade que esas no eran las circunstancias cuando se realizó la fiscalización, ni cuando se interpuso la demanda.

Alega que más aun cuando y hay que decirlo los dirigentes sindicales prácticamente no asisten a prestar sus servicios en las labores para las que fueron contratados, lo que ciertamente dificulta tener que habilitar un sistema de Tesorería especial para ellos y para cuando ellos definan – sin jamás avisar – el día o el horario en que concurrirán a trabajar.

Hace presente que sobre la segunda circunstancia, en este proceso de adaptación, debe considerarse la particular naturaleza de los cargos de los trabajadores derivados del cierre. Agrega que los trabajadores en cuestión tienen el cargo de Jefe de Sucursal (en los hechos Jefa de Caja) y Jefe de Tesorería. Añade que estos son cargos altamente específicos, únicos por sucursal, lo cual deriva del propio nombre; y que, como se ha dicho, corresponde a cargos que existían únicamente en la sucursal de Huérfanos; circunstancia que, como se ha dicho; se debe única y exclusivamente a la negativa, años atrás, del Sindicato, a incorporarse al nuevo sistema centralizado de cajas.

Entonces establece, ante esta disyuntiva alternativa era derechamente cambiar las funciones de los trabajadores (lo cual no era opción para ellos), o la segunda es asignarlos a un lugar corriente, y ver la forma de distribuir las funciones en una manera que permita al primer local funcionar sin sobredotación, pero que al mismo tiempo, permita entregar el trabajo convenido. Añade que debe observarse que entregar otras funciones del Tesorero, por ejemplo, a la Jefa de Tesorería, implicaría no entregar el trabajo convenido al Tesorero, por lo que necesariamente la solución tiene que requerir cierta adaptación tanto de la empresa como de los trabajadores, pero la pretensión de que la sucursal entera de Alameda alterara las funciones de todos los trabajadores para que los dos dirigentes realizarán las mismas funciones idénticas que existían bajo un sistema obsoleto y que por lo demás tampoco son realizadas en forma diaria por su asistencia, roza en el absurdo.



Menciona que entonces, cuando la Dirección del Trabajo procede a tomar un par de funciones al azar y apuntar indicando que es una práctica antisindical esta adecuación; aparece más como una interpretación artificiosa y de mala fe de la Inspección ante hechos que aparentemente deberían conocer, considerando como la demanda ni siquiera puede estar de acuerdo con sus propios informes, la respuesta a esa suposición aparece con más claridad.

La empresa precisa, en todo momento, a pesar de estar enfrentando una situación compleja, que, de nuevo, implican el cierre de sus más importantes sucursales, busca las maneras de hacer esto funcionar. Y no es necesario que este tribunal considere que esto es un acto de bondad o gratuito; sino un ánimo real de cumplir y ajustarse al ordenamiento jurídico; así como a la buena fe que opera en las relaciones laborales y sindicales que se mantienen con la empresa. Añade que para determinar una mala fe, que en un acto que atente contra la libertad de manera amplia como se pretende debe alegarse, y no un simple chequeo torpe de descriptores de cargo; debe intentarse la peor interpretación posible de los hechos que hemos descrito y, probablemente, solo quien obtiene multas a beneficio propio al final del proceso puede tener tal mirada.

Narra que a continuación, cabe hacernos cargo sobre si la situación descrita cabe dentro de una figura de práctica antisindical.

Queremos aclarar advierte, desde ya; sobre lo que se va a exponer a continuación: han explicado en forma clara y completa porque los hechos de la demanda son ciertos. Agrega que lo que se va a exponer a continuación no es un reconocimiento, sino una denuncia a que, incluso aceptando la tesis de la Dirección del Trabajo, e incluso si llegare a probarse que todos y cada uno de los hechos contenidos en la demanda son ciertos, estos no son prácticas antisindicales y esto no es porque esta parte no comparta la tesis de que pueda existir cierta lista no taxativa de prácticas antisindicales que puedan extenderse más allá del listado común. Alega que ese no es el problema. Razona que quisiera examinar la parte de derecho de la demanda, una parte de derecho tipo y que divaga sobre lugares comunes, e incluso inicia con una definición de contrato de trabajo.

Señala que la demanda divaga largamente sobre que es una práctica antisindical, de cómo exactamente uno puede estimar que existen más



prácticas antisindicales que aquellas señaladas. Agrega que todo esto parece ir destinado a explicar exactamente como todo esto sería una práctica antisindical. Añade que el desarrollo es extenso, al menos dos páginas, encabezado con un prometedor “Corresponde a continuación dar cuenta de cómo tales hechos constituyen un atentado en contra de la libertad sindical”, anunciando que se repararan los “daños efectos” provocados por este atentado.

Estas dos páginas explica, mayormente, no se refieren a los hechos de la demanda. Añade que se trata de una divagación vaga, genérica sobre la libertad sindical, de cómo las prácticas antisindicales no tienen carácter taxativo, etc. e incluso hay dos largos párrafos sobre fuero sindical, lo cual nada tienen que ver con este juicio. Sin embargo agrega, todo esta larga vuelta lleva un breve párrafo:

“Sin perjuicio de ello, en la especie, los hechos debidamente constatados en el marco de la fiscalización efectuada, igualmente son susceptibles de encuadrar en la causal no taxativa de las letras A y F del artículo 289 del Código del Trabajo, pues se verifica una discriminación indebida en contra de la dirigente sindical afectada al no proporcionar la labor convenida en el contrato de trabajo”.

Dice que este párrafo es toda la argumentación aplicable al caso, por lo que a este nos remitiremos.

Primero sostiene, que debe denunciar que se habla de “la dirigente sindical” a pesar de que la demanda habla de hechos que afectan a dirigentes en plural. Segundo agrega, se mencionan dos conceptos claves, que deben ser objeto de análisis: discriminación indebida y no proporcionar el trabajo convenido.

Expone que sobre la discriminación indebida; debemos observar que la situación del cierre del establecimiento afectó no solo a los dirigentes en particular. Añade que como se ha descrito; la expresión discriminación requeriría una distinción respecto de ellos. Por el contrario agrega, lo que se ha descrito en esta contestación es que se les han dado más facilidades de las que le correspondían a otros trabajadores en su misma situación y en cuanto a la situación que se imputa, no solo es falsa, sino que cualquier acción tomada por la empresa y que ya han sido latamente explicadas, no caben en la hipótesis del artículo 2 del Código del Trabajo.



Luego indica, la demanda, a pesar de hablar de discriminación, no aclara si la discriminación se debe o no al carácter de dirigente sindical. Agrega que solo utiliza la expresión “discriminación indebida a la dirigente sindical”(es), pero no queda claro en qué forma esta discriminación se realizaría en razón del carácter sindical de los dirigentes. Esto añade, contrario a lo que la parte contraria podría plantear, dista mucho de ser insignificante: determinar si esto se trata de una discriminación por el carácter de dirigente incide directamente en determinar si existe una práctica antisindical.

Manifiesta que si se acepta la tesis que todo conflicto jurídico en el ámbito laboral que involucre a un dirigente sindical constituye una práctica antisindical, entonces existiría un proceso especial determinado solo para los desacuerdos que existieran con los dirigentes en tal sentido, lo cual claramente no es el caso. Añade que debe observarse que no hay ninguna alegación en torno a que se haya obstaculizado la labor sindical y más importante o grave aún, no hay ninguna imputación ni de los dirigentes ni de la denunciante respecto al despido de todos los trabajadores de las dos sucursales.

Refiere que la razón por la que no la hay, es porque la denuncia original contenía una alegación de que se les estaría pidiendo intercambiar horas de permiso sindical a cambio de realizar el trabajo convenido; pero nada de eso se menciona en la demanda; por lo que, exactamente, ¿en qué se basa la supuesta discriminación? Más aun, obsérvese que el petitorio pide entregar el trabajo convenido a los trabajadores, nada señala sobre acabar con esta supuesta discriminación, la que solo aparece, escuetamente, mencionado en este párrafo de derecho; que aparece casi como para justificar las tres páginas de argumentación vacía anteriores.

Alega que luego viene el punto que resulta más importante: “No proporcionar el trabajo convenido”. Como han dicho agrega, niegan que esto sea así, y el relato de los hechos presentado respaldará lo ya expuesto...

...pero la no entrega del trabajo convenido - insistimos en negarlo - no es hace presente, de por sí, una práctica antisindical. Añade que puede ser un incumplimiento de contrato, puede ser un acto reprochable y que requiere corrección de haber sido efectivo (No lo es); y para lo cual existen sanciones, multas, acciones ordinarias, incluso.



Establece que si la parte contraria pretendía explicar exactamente como era una práctica antisindical; debió hacer algo que puede resultar obvio: explicarlo. Porque este el asunto añade, existe una tendencia en las últimas demandas de la Dirección del Trabajo con llenar de párrafos de derecho que nada aportan a la acción intentada. Nada explican agrega, son un montón de letra muerta destinado a crear la apariencia de un derecho; pero copiar y pegar textos de otras demandas no es sustituto de argumentación jurídica.

Menciona que lo contenido en esta demanda es una explicación de cómo las prácticas antisindicales son amplias, pero no una explicación de cómo exactamente esa amplitud cabría este caso y pretender que con esto basta implicaría suponer que las prácticas antisindicales no solo tienen un ámbito de aplicación amplio, sino que ilimitado, incluso infinito.

Precisa que esto no es todo, al revisar los antecedentes de la fiscalización 1350/2023/80, resulta que lo denunciado originalmente, en “Acta de Notificación por Denuncia por Vulneración de Derechos Fundamentales” del 10 de marzo del año 2023; era por “Obstaculizar la formación o funcionamiento de Sindicatos de Trabajadores negándose injustificadamente a recibir sus dirigentes, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo o de beneficios, en caso de acordarse la constitución del Sindicato”. Por un lado añade, resulta claro que tal vulneración no solo es real, sino que no se condice con los hechos de la denuncia; pero además, esta denuncia fue rechazada, a pesar de fundarse en que exactamente los mismos hechos, como ya hemos hecho referencia, y como consta en OFICIO ORDINARIO No: 1300-10183/2023.

Narra que más importante aún; al menos esa denuncia establecía una figura de práctica antisindical acorde a la legislación, a pesar de que claramente los hechos, como se ha expuesto, no son efectivos.

Advierte que quieren decir que la Inspección del Trabajo puede alegar que estos son tecnicismos, y que es irrelevante; pues la intención de la acción se asoma en los hechos expuestos, y que independiente de que la parte de derecho sea poco clara en este punto, uno puede entender la intención real de la acción, en particular invocando la naturaleza tutelar del derecho laboral. A esto añade, la naturaleza tutelar no es un sustituto para la prolijidad en la presentación de las demandas. Y segundo agrega, tal pretensión afectaría al



principio rector de los juicios en ámbito laboral, que es la bilateralidad de la audiencia. Alega que no se trata de adivinar la intención de la Inspección o esperar que sea la sentenciadora quien salve este problema. Sostiene que se defiende de la demanda; y esta, dejando de lado el montón de maquillaje encima, no tiene más argumento jurídico que este breve, escueto y pobre párrafo, que ni siquiera tiene la virtud de contar correctamente el número de dirigentes sindicales de los cuales se acusa no entregar el trabajo convenido.

Que en relación a las medidas solicitadas razona, solicita que todas las peticiones sean rechazadas.

Sin embargo señala, esta parte debe realizar una observación sobre el mismo, que va más allá de simplemente indicar que no corresponde por no ser efectivos los hechos ni ser conforme a derecho el resto de la demanda.

Expone que el primer problema reside en la petición número 3, en la cual se solicita las medidas concretas, las que, para dar crédito a la Dirección, se individualizan, pero ellas tienen el siguiente defecto:

- Se pide que se “acuerde junto con el trabajador una labor similar”, sin perjuicio de que ha entregado las labores; lo cierto es que condenar a “acordar” con trabajadores que no son parte del juicio no es una medida que pueda decretarse. En particular añade, porque los trabajadores deberían estar de acuerdo. Agrega que la naturaleza de la sentencia que se pretende no es erga omnes y no podría ser vinculante a estos dirigentes, volviendo esto una solicitud más bien vacía.

- Segundo, existe una mención a multas del artículo 492 del Código del Trabajo, lo cual no tiene sentido, porque tales multas están establecidas para sanciones de medidas de suspensión de efectos del acto vulneratorio, no para la sentencia. Más aun agrega, volviendo al punto anterior; si se decretara la medida de acuerdo con los trabajadores, y ellos no aceptaran, ¿se multaría a ella? Agrega que parece una medida no razonable.

- Se solicita el pago de las indemnizaciones que correspondan. Añade que esta solicitud resulta poco seria, por no especificarse que indemnizaciones. ¿Daño emergente, lucro cesante? Agrega que creían que el informe especifica claramente que a los trabajadores se les ha pagado todas las remuneraciones, aparece claro que no es el tema. ¿Daño moral? ¿Fundado en qué? ¿O una indemnización abstracta e indefinida que la Inspección no se ha tomado la



molestia de individualizar en su demanda? Añade que es cierto que el artículo 495 entrega cierta libertad al sentenciador al momento de dictar sentencia para establecer las medidas que restauren el imperio del derecho, pero eso no es una puerta para que las demandas no se ajusten al artículo 446 del Código del Trabajo, en el sentido de contener las demandas la enunciación precisa de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal.

Finalmente dice, no solo no puede llamar la atención de que se solicite la multa de 300 UTM's por algo que ni siquiera han logrado justificar como práctica antisindical en su justificación; cuando el rango que se establece siendo el máximo 300; no el estándar, siendo el mínimo 20 y máximo 300.

Sostiene que además; yerra la Dirección del Trabajo: no pueden “duplicarse o triplicarse” las multas del artículo 292 del Código del Trabajo, pues tal posibilidad se establece considerando el rango del artículo 506, que mide las empresas en pequeñas, medianas, y grandes empresas, rango que ya está considerado en el artículo 292 del Código del Trabajo.

Explica que pretender que una multa, respecto a la cual se ha establecido un rango para un criterio, podría duplicarse o triplicarse, bajo el mismo criterio bajo el cual se establece ese rango. Añade que esto es una interpretación antojadiza y que solo puede explicarse en ignorancia, torpeza, o derecha mala fe de la Dirección del Trabajo, siendo la más probable la segunda, considerando el estado en que se presenta esta demanda.

TERCERO: Que con fecha 4 de mayo de 2023 el Sindicato de Empresa Sonorad II S.A. se incorporó al juicio como tercero coadyudante.

CUARTO: Que con fecha 12 de mayo de 2023 tuvo lugar la audiencia preparatoria, en ella el tribunal llamó a los litigantes a **conciliación**, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.

Atendido lo precedentemente relatado y existiendo al juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijo los siguientes **hechos a probar**:

Efectividad de haber incurrido la denunciada en la práctica antisindical de no otorgar el trabajo convenido. Hechos y circunstancias.

QUINTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte **demandante** rindió los siguientes medios de prueba consistentes en:



I.- Documental:

Incorporó mediante lectura los siguientes documentos no objetados de contrario, consistentes en:

1. Informe de Investigación 1322.2023.452.
2. Informe de Investigación 1301.2023.818 de fecha 28.02.2023.
3. Acta de mediación en comisión N° 1301.2023.808 de fecha 03.03.2023.
4. Certificado 1301/2023/3697 de 05.05.2023 de dirigencia y vigencia sindical.

II.- Testimonial:

Rindió la testifical de Daniel Edmundo Núñez Faundes y Robinson Boris Vera Ahumada, quienes legalmente juramentados, expusieron:

El primero que conoce a Robinson Vera y Alejandra Vargas, porque son dirigentes sindicales y llevan casi 20 años como compañeros de trabajo. Expone que son dirigentes sindicales de Sindicato de Empresa Sonorad II S.A. . Añade que en noviembre de 2022, la empresa demandada cerró dos sucursales, una de ellas donde prestaban servicios. Explica que les preguntaron donde querían ser trasladados, diciendo que querían ir a la sucursal Alameda con sus labores. Añade que se les comunicó el mismo día que cerro la sucursal por medio de una carta, les proponían elegir una sucursal o bien mantenerse sin prestación de servicios con el pago de remuneraciones. Añade que después de esa fecha tuvieron una reunión bipartita el 6 de diciembre, participando Macarena Mora, Silvana Plazo y Francisco Valdivia y le dijeron que debían dar respuesta a la carta. Agrega que en esa reunión no dieron respuesta, pero sí lo hicieron el 6 de enero de 2023, indicando la sucursal Alameda, diciéndole que iban a habilitar el lugar de trabajo. Agrega que les dijeron que a contar del 6 de febrero, no recuerda bien el día, debiendo concurrir ese día. Añade que llegaron al lugar de trabajo las condiciones no estaban, no había habilitado sistema, no estaba coordinado con la jefatura y a el le prohibieron hacer funciones de su trabajo. Expone que en el caso de las restantes personas, les habilitaron una oficina, diciéndoles que podían hacer la labor sindical también. Agrega que en el caso de esas personas a ellos no les habilitaron las claves, cumpliéndolas un Tesorero externo en la mañana y tenían a una jefa de sucursal que iba a varias funciones, dejando a una cajera con las llaves para que fuera necesario, llamado a esa persona la jefa de sucursal que era Daniela Zegers, que quedó como jefa de todas las sucursales.



Manifiesta que en otra oficina aparte estaba el Tesorero, que era donde estaba la caja fuerte, que podía caber una persona, que estaba entre la entrada y la oficina que los habilitaron. Expresa que el Tesorero era externo, porque venía de una empresa externa, lo que quisieron habilitar anteriormente pero no pudieron porque reclamaron las personas que se desempeñaron esas funciones que eran dirigentes sindicales. Explica que tenía Tesorero externo sucursal Las Bellotas, Irarrázaval etc. Explica que cuando no pudieron realizar sus funciones Robinson y Alejandra llamaron a Macarena Mora y también lo conversaron en las reuniones bipartitas, pero la empresa decía que estaban las condiciones para prestar servicios, pero no podían, inclusive fueron dos generalistas Macarena Mora y Silvana Plaza y dijeron que iba a solucionar el tema. Explica que el día 6 de febrero él estaba de vacaciones, por lo que el concurrió la semana anterior, después de la reunión bipartita, conversando sobre sus funciones. Agrega que como estaba de vacaciones se contactaba con los otros dirigentes y le contaron lo que estaba pasando. Añade que durante sus vacaciones, él se comunicó con Daniela Zegers, que era la jefa de imágenes que no podía tomar exámenes. Explica que ante la Inspección del Trabajo dijeron que se allanaban a darle el trabajo, pero iban y no podían cumplir sus funciones. Contraexaminado expresa que el cumplía funciones en la sucursal de Huérfanos, fue a trabajar la gran mayoría de los días, dependiendo de los turnos. Explica que estuvo de vacaciones en febrero, porque estaba en conocimiento de los hechos por conversaciones y por haber ido al lugar. Contraexaminado señala que la oficina que le ofrecieron era para trabajar y realizar labores sindicales, porque antes en la sucursal de Huérfanos les ofreció una oficina en el 7° piso y cuando cerraron esa sucursal se las pidieron. Añade que después les llegó una notificación de desalojo y ahí ellos pidieron que les dieran una nueva oficina. Sostiene que Sonorad tenía 7 sucursales, teniendo afiliados en todas las sucursales, teniendo la mayor cantidad de afiliados, Huérfanos, Maipú y Bellotas. Señala que han existido varios cambios de dueños, finalmente Integramedica y que se cerró la sucursal de Bellotas primeramente. Interrogado por el Tribunal señala que es dirigente sindical desde abril de 2017. Explica que presta servicios no en un horario establecido, pero iba gran parte de la semana. Añade que iba 3 o 4 días. Expone que no registraba asistencia, porque muchos años atrás, antes de esta



gerencia, les dijo que quedaban libres de marcar asistencia. Añade que iba todas las mañanas y parte de la tarde. Añade que iba de 09:00 a 15:00 a 16:00 horas y avisaba cuando faltaría y contrataron a una persona para reemplazarlo. Añade que concurrió físicamente antes del 20 de febrero, no pudiendo realizar sus funciones, porque ya le habían notificado a la tecnóloga que no podía ejercer sus funciones, no recordando su nombre. Agrega que las otras personas tampoco pudieron ejercer sus funciones.

El segundo que el 30 de noviembre la empresa cerro la sucursal en la cual estaban trabajando Huérfanos y le dijo que sus puestos de trabajo estarían en la sucursal Alameda. Expone que se refiere a los dirigentes sindicales el, Paola Vargas y Daniel Núñez. Explica que él y la señora Vargas eran jefe de cajas y el señor Núñez, técnico. Explica que se les notificó el 30 de noviembre y se les dijo que tenían que decir en que sucursal ejercerían sus funciones y en enero dijeron la sucursal Alameda. Explica que les notificaron el cierre de la sucursal y su decisión de elegir la sucursal, teniendo para ello un tiempo prudente según la carta. Expone que en Viña del Mar el cargo de jefe de cajas y en Huérfanos, porque antes lo había eliminado en otras sucursales. Explica que les dijeron que sus puestos de trabajo iban a estar habilitados con las claves, lo que no sucedió. Expone que en la reunión bipartita de la primera semana de enero plantearon las respuesta estando Macarena Mora, Silvana Plazo y Francisco, planteando mantener sus funciones desde el 6 de febrero, que es lo mismo que dijo el abogado de la empresa ante la Inspección del Trabajo, porque ellos realizaron una denuncia porque la empresa no estaba cumpliendo, en diciembre y en febrero, esto último porque llegaron a la sucursal y sus puestos de trabajo no estaban habilitados. Expresa que se les entregó una oficina sindical, que además tenía camillas, sin luz, que luego fue habilitada, expresa que no podían ingresar al sistema, además de no poder acceder a sus funciones como disposición de sencillo, entrega de valores, anular bonos, hacer cierre y apertura de caja y supervisión, teniendo solo acceso a los correos institucionales. Manifiesta que les llegó un correo de Macarena Mora, que decía que debía presentarse el día 6 y cuando llegaron estaba Daniela Zegers y Silvana Plaza. Expresa que ellos reclamaron y les dijeron que estaba todo habilitado para ejercer las funciones, pero no era efectivo lo que se corroboró por una fiscalización que se hizo por la Inspección



del Trabajo, debido a un reclamo, constatando que no estaban habilitados sus perfiles como su jefatura ni oficina, no modificándose por el empleador porque según lo dijo Cristóbal Torrealba no estaban vulnerando nada. Explica que ellos no marcaban asistencia, porque tenían un derecho adquirido y siempre había un back up o alguien que los reemplazara, lo anterior desde hacía 10 años. Manifiesta que no había procedimiento para la ausencia porque siempre había quien les reemplazara. Agrega que no recuerda que les solicitaran un permiso sindical para ausentarse. Manifiesta que prestaba servicios, dependiendo de las exigencias del sindicato y sus funciones era apertura de cajas, cierre de cajas, entrega de sencillo, bonos. Refiere que su back up eran las cajeras, jefa de sucursal. Agrega que cuando se presentan en Alameda, ni siquiera le presentaron a quien desempeñaba la función de Tesorero, la oficina era para una persona y era funcionario de Sonorad. Contraexaminado señala que los dirigentes no registraban asistencia, pero no sabe si Alejandra Vargas registraba asistencia. Manifiesta que ellos jamás recibieron una autorización de la empresa, porque se transformó en un derecho adquirido, nunca les dijeron que debían marcar tarjeta o no, haciendo lo mismo don Daniel. Explica que sabe que la compañía tenía pérdidas y los equipos los traslado a Integramedica y los fue dejando sin jefatura. Expone que era reemplazado en Huérfanos por Beatriz Verdugo, Alejandra Vargas, Paola Navarrete y Angélica Ferrada. Explica que no había anticipación para informar la ausencia porque habría alguien ahí. Contraexaminado por el tercero coadyudante que asistió a la conciliación estando con Cristóbal Torrealba, que no había nada que corregir, porque la empresa estaba entregando el trabajo convenido. Explica que hubo fiscalizaciones, pero ellos siempre decían que iban a corregir y después dijo que no había nada que corregir. Expone que el señor Torrealba solo asistió a la mediación ante la Inspección de Trabajo. Interrogado por el Tribunal indica que él podía hacer todo lo que le permitiera hacer el sistema Sap y no pudo ingresar al ser cambiado de Sucursal. Explica que se le decía que estaba todo habilitado. Añade que concurrieron a prestar servicios, pero no de lunes a viernes, fue tres veces a la semana. Indica que fue tres veces a la semana. Indico que antes fue a la oficina y el piso 8 de lunes a viernes. Explica que estaba yendo a las otras sucursales. Explica que su función era jefe de cajas, Tesorero. Añade que no pudo realizar ninguna función, porque no pueden



haber dos Tesoreros. Manifiesta que no pudo prestar ninguna de sus funciones. Añade que no podía hacer nada, porque ni siquiera fueron presentados a la jefatura. Alega que debieron haber sido presentado por Daniela Zegers, jefa de sucursal, Macarena Mora, Silvana Plaza. Explica que don Daniel era técnico de imágenes, no las pudo realizar porque el 6 de febrero estaba de vacaciones, pero el posterior a ello, hablo con Daniela Zegers y Macarena Mora y tenía una prohibición, por indicación médica y jefatura no podía estar en la sala. Agrega que era por instrucción del directorio de la empresa. Explica que Alejandra Vargas era jefa de sucursal, ahí había una jefa de sucursal, pero antes de ser dirigente la reemplazaba, pero también fue asumiendo el cargo de jefa de cajas. Añade que cuando no estaba el jefe de cajas era reemplazado por el jefe de sucursal, creándole el perfil pero no podía desarrollar nada, aún mantenía en perfil de Huérfanos, no pudiendo hacer nada. Agrega que no podía hacer cosas de jefe de sucursal.

SEXTO: Que luego el **tercero coadyudante** incorporó en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba:

I.- Documental:

Incorporó en la audiencia de juicio los siguientes documentos no objetados de contrario, a saber:

1. Contrato de Trabajo de Daniel Edmundo Núñez Faundes.
2. Anexo Contrato de Trabajo de Alejandra Paola Vargas Vargas.
3. Anexo de contrato de Trabajo Robinson Boris Vera Ahumada.
4. Nómina de socios para los efectos del descuento Sindical con el comprobante de pago de la denunciada correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.
5. Nómina de socios del sindicato SONARAD II con identificación de la sucursal a la que pertenecían a diciembre del año 2022.
6. Certificado de Vigencia Sindicato SONORAD II.

II.- Exhibición de documentos:

El tercero coadyudante pidió se exhibieran los siguientes documentos:

1. Contrato de Trabajo o contrato o convención de cualquier naturaleza que regule la figura, ya sea interna o externa, del tesorero en la sucursal Alameda.



2. Contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Huérfanos N° 757, Piso 8, Santiago centro.

III.- Declaración de parte:

Rindió la declaración de Alejandra Paola Vargas Vargas, quien legalmente juramentada expuso ingreso a la demandada en el año 2001, partiendo en Hernando de Aguirre, Bellotas, Huérfanos 840, Huérfanos 757, piso 8. Añade que el día 30 de noviembre de 2022, cerrando la sucursal de Huérfanos 757 piso 8. Explica que era jefa de sucursal, además prestaba servicios como jefe de cajas cuando su compañero no asistía. Explica que estaba contratado como jefe de sucursal y dentro de sus funciones estaba reemplazar al jefe de cajas. Explica que prestó servicios en sucursal Alameda porque la trasladaron a esa sucursal, pidiéndole la empresa que eligieran una sucursal y ella eligió esa. Agrega que la empresa les indicó el 30 de noviembre de 2022, por correo electrónico aquello y después les llegó una carta certificada. Expresa que las elecciones de la carta, era elegir la sucursal o dedicarse solo a las funciones sindicales. Manifiesta que eligió el cambio de sucursal. Agrega que en el piso 8 estaba el centro médico y en el piso 7 estaba la oficina sindical. Añade que hacía ambas generalmente, dependiendo lo que debía hacer. Añade que pedía una persona que los cubría, siempre tuvieron un back up, solo tenía que avisar que no asistiría. Añade que no firmaba registro de asistencia, porque se recuerda que en una oportunidad, se le indico que no lo debía hacer porque tenía artículo 22. Expresa que en la primera reunión del comité bipartita de enero de 2023, les indicaron a las personas con que tenían la reunión les dijeron que era la sucursal Alameda, dándoles un plazo para habilitar sus perfiles, siendo ese plazo hasta el 6 de febrero. Expresa que ese día fueron con Robinson a trabajar y revisar los perfiles. Añade que el lugar de trabajo estaba pero en el computador ingresaba su usuario y solo podía entrar no podía ejercer nada, nunca pudo trabajar y Robinson menos. Expresa que no pudo ejercer la labor de sucursal, porque había otra jefa de sucursal, tratando de ir todos los días, pero de lo contrario hacían trabajo sindical. Agrega que iba 3 o 4 veces, tratando de ingresar al sistema y no podía, incluso su correo electrónico se bloquea el usuario. Expresa que don Robinson era jefe de cajas, cierre de cajas, cuadraturas, preparar retiros prosegur, arqueo y cambio de sencillo, añade que él no podía realizar sus funciones. Agrega que



adicionalmente se les dijo que como ellos tenían otro sistema de caja, la línea de caja era supervisado por una central telefónica e iba a un Tesorero alguna vez del día. Expresa que don Daniel tomaba rayos, cuando ingreso a la sucursal Alameda, quiso hacerlo, pero le dijeron que no tenía autorización para ejercer.

SEPTIMO: Que a su turno la **demandada** incorporo en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba:

I.- Documental:

Incorporo en la audiencia de juicio los siguientes documentos, no objetados de contrario, a saber:

1. Set de 3 cartas de término de contrato de arrendamiento, respecto de los inmuebles ubicados en calle Concha y Toro N°546, Puente Alto, Las Bellotas N°198 al 212, y calle Suecia N°143-C, ambas de la comuna de Providencia, Calle Huérfanos N°757, octavo piso, oficina 704, 705, 706 de la comuna de Santiago.
2. Resolución exenta del Seremi de Salud correspondiente al cierre de la sucursal de Bellotas y Huérfanos.
3. Estados Financieros de la empresa Sonorad II SA., del año 2018, 2019, 2020, 2021, y 2022;
4. Balance general de la empresa Sonorad II SA., del año 2018 a 2022;
5. Estados de resultados consolidados del año 2018 a 2022.
6. Listado con desvinculados por necesidades de la empresa de los años 2021 a 2023.
7. Comunicación de cierre permanente sucursales Sonorad enviado por Nueva Masvida a sus afiliados.
8. Correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2022, enviado a sindicatosonorad@gmail.com, asunto Cierre sucursales Huérfanos y Las Bellotas, y cartas adjuntas.
9. Dos correos electrónicos de fecha 28 y 29 de diciembre respectivamente, entre Macarena.mora@bupa.cl y Sinciatiasonorad@gmail.com, asunto: Cierre Sucursales Huérfanos y Las Bellotas.
10. Tres correos electrónicos de fecha 2 de diciembre de 2022, enviado a sindicatosonorad@gmail.com, asunto Cierre sucursales Huérfanos y Las Bellotas.



11. Liquidaciones de remuneración de doña Alejandra Vargas, don Robinson Vera y don Daniel Núñez del periodo comprendido entre octubre de 2022 y enero de mayo de 2023.
12. Registro de asistencia de doña Alejandra Vargas, don Robinson Vera y don Daniel Núñez año 2022.
13. Informe de investigación N° 1322/2023/452.
14. Informe de investigación N° 1301/2023/818.
15. Correo electrónico de fecha 9 de enero de 2023, enviado a Sindicatosonorad@gmail.com, asunto Minuta Sindicato Sonorad II 04.01.2023.
16. Correo electrónico de fecha 1 de febrero de 2023, enviado a Sindicatosonorad@gmail.com, asunto Minuta Sindicato Sonorad II 01_02_2023.
17. Certificado de incidencia Clave Sap de fecha 3 de febrero de 2023.
18. Correo electrónico de fecha 13 de marzo de 2023, enviado a Sindicatosonorad@gmail.com, asunto Minuta Comité Bipartito Sonorad II 01_03_2023.
19. Acta de notificación de fecha 10 de marzo del año 2023.
20. Actas de declaración Jurada de fecha 8 de marzo de 2023.
21. Oficio ordinario 1300-10183/2023 de fecha 26 de abril de 2023.
22. Documento titulado "Oficina nueva sucursal Alameda".
23. Organigrama sucursal Sonorad Huérfanos y Sonorad Alameda.
24. Contrato colectivo suscrito entre Sonorad II y Sindicato de Trabajadores Empresa Sonorad II S.A. de fecha 18 de junio de 2021.
25. Carta enviadas a doña Alejandra Vargas, don Robinson Vera y don Daniel Núñez con fecha 14 de marzo y comprobante de envío correo certificado.
26. Cadena de correos con asunto "Cierre Sucursales Huérfanos" entre doña Macarena Mora y Sindicato Sonorad; del 14 al 23 de marzo.
27. Declaración jurada del 2 de febrero del año 2023 de don Cristóbal Torrealba del Río a Dirección Regional Metropolitana Oriente.

II.- Testimonial:

Rindió la testifical de Macarena Cristina Mora Mora quien legalmente juramentada expuso se encuentra declarando por una práctica antisindical. Explica que en la demandada había dos sindicatos. Señala que trabajaba como asesora de personas. Manifiesta que se reclama no haber entregado el trabajo



convenido a los dirigentes sindicales de Sonorad. Refiere que la demandada es una empresa que venía teniendo pérdidas desde hace 5 años, lo que significó cerrar sucursales y a fines del año pasado cerró las Bellotas y Huérfanos donde trabajaban los dirigentes sindicales y en eso se conversó con ellos, verba y en forma escrita, ofreciéndoles trasladarse a la sucursal que vieran conveniente o quedarse en labores sindicales, determinando en enero de 2023, que querían la sucursal Alameda, eran técnico en enfermería, jefe de sucursal y jefe de cajas, respectivamente, pero hacer 3 años que no realizaban funciones desde hacía tres años, no teniendo marcaciones en los últimos años, es de conocimiento público que asistían muy de vez en cuando a la sucursal. Agrega que cuando se cerró la sucursal de Huérfanos se les comunicó verbalmente en ese día que pudieran elegir la sucursal que eligieran que era Alameda, Irarrázaval o bien mantenerse como dirigentes sindicales, debido a las inasistencias, recibiendo respuesta de que quieren ser trasladado a la sucursal Alameda, pidiendo además que se les dé un espacio para la actividad sindical. Añade que se debieron hacer averiguaciones porque en la sucursal había jefe de sucursal y además se había reemplazado la función de jefe de cajas, por un funcionamiento centralizado de cajas, con un Tesorero que iba. Agrega que se hicieron adecuaciones, físicamente se hubo que preparar una oficina, para las reuniones como dirigentes sindicales, siendo equipada para ello. Expresa que el sistema Sap es el sistema contable que tenía la compañía para la caja. Refiere que el Sap eran utilizados por Paola, porque era quien iba a Huérfanos mas regularmente y Robinson menos. Añade que al no darle uso la clave caduca. Expresa que los trabajadores antes referidos tenían claves SAP, pero ellos mismos les dijeron que no podían acceder, pero a través de Silvana Plaza les dijeron que llamaran por teléfono para que les habilitaran las claves. Contraexaminada dice que es asesora de la gerencia de personas. Manifiesta que en enero los trabajadores les informaron que iban a prestar servicios en Huérfanos el 6 de febrero. Añade que se les informó que Alameda contaba con un servicio centralizado de Tesorería, por eso les dijeron cuando informaron que se irían a dicho lugar, les pidieron que les diera un plazo para la adecuación, creyendo que era el 6 de febrero. Manifiesta que efectivamente la gerencia de operaciones Daniela Zegers, tuvo las conversaciones con el equipo, para poder hacer estas previas



coordinaciones. Añade que no era posible la entrega de todas las funciones porque llevaba mucho tiempo operando el sistema centralizado de caja. Agrega que había funciones que si podían desarrollarse, como administrativas, por ejemplo en el caso del jefe de cajas, gestiones de turno, anulaciones en Sap, bloqueos, añade que todo lo que tiene que ver con gestiones de supervisión podía hacerlo, quedaba en forma paralela al Tesorero, porque esta persona sola veía valores. Agrega que las actividades que realizaba la supervisión central lo haría el jefe de cajas, cuando estuviera presente. Manifiesta que la jefa de operaciones de sucursal Daniela Zegers que si había tenido una conversación con el jefe de cajas, que no fue agradable, pero la tuvieron. Añade que si bien el trabajador conocía el sistema de supervisión de cajas, porque el mismo trato de implementarse en la sucursal Huérfanos y a los dirigentes no les pareció. Explica que en Febrero de 2023, se le informo las funciones a realizar al jefe de cajas y jefe de sucursal verbalmente, lo que hizo Daniela Zegers, porque fue lo que se le instruyó y ellos supusieron que ocurrió porque le fue informado por ella y además se recibieron reclamos por el otro sindicato, porque sus socias reclamaron por el trato del señor Robinson Vera como jefe de cajas. Explica que la señora Zegers les informó a las trabajadoras que el señor Vera era el jefe de cajas. Contraexaminado por el tercero coadyudante indica que ella no hizo revisión personal de si los trabajadores tenían habilitadas sus claves Sap, lo hizo el encargado respectivo. Interrogada por el Tribunal señala que se hicieron adecuaciones para prestar servicios dentro de lo que se podía. Agrega que habían dos jefes de sucursal, en forma teórica, porque la señora Vargas siempre trabajo como jefa de cajas, lo que se producía que Sonorad Huérfanos tenía una estructura diferente a Sonorad Alameda. Añade que Paola Vargas, en sucursal Huérfanos se dedicaba a la jefatura de cajas y además jefatura de sucursal. Agrega que en Sonorad Huerfanos, habían dos jefes de sucursales, porque la función de la Vargas eran jefe de cajas, porque el señor Robinson no iba a prestar servicios. Añade que a don Daniel se le ofreció trabajar como técnico en imagenología y el no se reintegró porque estaba de vacaciones y cuando llego a la sucursal pidió tomar exámenes, lo que no podía hacer, porque la normativa vigente dice que son Tecnólogos médicos y el rol era solo de asistencia. Añade que antes del cambio de sucursal hacía mucho tiempo que no desempeñaban funciones.



SEXTO: Que para resolver la acción de autos, es necesario tener presente que la libertad sindical dice relación con la facultad de los trabajadores de constituir sindicatos y afiliarse libremente a estos, como la posibilidad de las organizaciones sindicales de efectuar sus actividades sin restricción más allá de lo establecido por el legislador, buscando con ello proteger y promover la actividad sindical y asegurar una defensa efectiva de los intereses de los trabajadores representados por la organización sindical.

Que asimismo debe considerarse, que se trata de un derecho humano de carácter fundamental, consagrado a nivel constitucional y recogido en declaraciones y tratados internacionales, vinculantes para el Estado de Chile, tal como los Convenios Básicos de Libertad Sindical 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo.

Que de esta forma, para que una conducta sea constitutiva de práctica antisindical es menester que el acto que se presenta como lesivo al derecho fundamental en comento, esté inspirado por el propósito de afectación de la libertad sindical o que suponga una actitud de desconocimiento de ese derecho, de un modo que resulta inconciliable con su naturaleza, importancia o entidad.

Que luego la doctrina ha indicado que las prácticas antisindicales corresponden a aquellas acciones que atentan contra la actividad sindical, entendiéndose esta última como “los comportamientos que tienen por objeto o finalidad la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores”, (Villavicencio Ríos, Alfredo. “La protección de la libertad Sindical (limitada y simbólica en el Perú. Obra citada en el libro Tutela de la Libertad Sindical. Cesar Toledo Corsi. Abeledo Perrot. Primera Edición. Año 2013.)

SEPTIMO: Que tal derecho se encuentra regulado además en nuestro Código del Trabajo, en particular en el artículo 289 del Código del Trabajo, que indica que las prácticas desleales o antisindicales son aquellas acciones que atentan contra la libertad sindical, incurriendo especialmente en dicha infracción, el que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de trabajadores, negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes, ejerciendo presiones mediante amenaza de pérdida de empleo o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena en el caso de acordarse la constitución de un sindicato o el que maliciosamente ejecutare actos tendientes



a alterar el quórum de un sindicato o despedir trabajadores por haber manifestado su intención de sindicalizarse; negarse a proporcionar a los dirigentes del o los sindicatos base la información a que se refieren los artículos 315 y 317; ofrecer u otorgar beneficios especiales que signifiquen desestimar la formación de un sindicato; realizar alguna de las acciones indicadas en las letras precedentes, a fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente; ejecutar actos de injerencia sindical, tales como intervenir activamente en la organización de un sindicato, ejercer presiones conducentes a que los trabajadores ingresen a un sindicato determinado, discriminar entre los diversos sindicatos existentes otorgando a unos y no a otros, injusta y arbitrariamente, facilidades o concesiones extracontractuales o condicionar la contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de afiliación a un sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por planillas de remuneraciones; negarse a reincorporar en sus funciones a un dirigente sindical aforado, frente al requerimiento de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo, salvo que el tribunal respectivo haya decretado la separación provisional del trabajador de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 174; ejercer discriminaciones indebidas entre trabajadores que signifiquen incentivar o desestimar la afiliación o desafiliación sindical; otorgar o convenir con trabajadores no afiliados a la organización u organizaciones que los hubieren negociado, los mismos beneficios pactados en un instrumento colectivo, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 322 de este Código y no descontar o no integrar a la organización sindical respectiva las cuotas o aportes sindicales, ordinarios o extraordinarios, que corresponda pagar por los afiliados, o la cuota o aporte convenido en un acuerdo de extensión de conformidad al artículo 322, cuando este proceda, sin que aquello sea una enumeración taxativa, admitiendo otras manifestaciones.

OCTAVO: Que en cuanto a su regulación procesal, las prácticas antisindicales de conformidad 486 del cuerpo legal antes mencionado, se tramitaran conforme el procedimiento de tutela laboral.

NOVENO: Que para fundar su demanda, la parte demandante señala una serie de hechos que constituirían indicios de la vulneración de derechos fundamentales alegada, los que serán analizados uno a uno para establecer su concurrencia.



DECIMO: Que el **primer indicio** señalado es que don Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, tiene la calidad respectivamente de Presidente y Tesorera del Sindicato De Empresa Sonorad II S.A., RSU 1301.3118 y por ende, se encuentran amparados por fuero sindical.

Que no se encuentra controvertido en juicio que las personas antes referidas son el Presidente y Tesorera del Sindicato De Empresa Sonorad II S.A y se encuentran amparados por fuero sindical.

Que sin perjuicio de lo anterior, se acompañó al proceso el certificado de vigencia del certificado del sindicato antes referido, que da cuenta de la existencia de dicho sindicato y que Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas son Presidente y Tesorera, respectivamente, estando vigente su calidad hasta el 11 de julio de 2023.

Que además de lo anterior, consta aquello de los informes de exposición, que gozan de presunción legal de veracidad y contrato colectivo incorporado al proceso.

UNDECIMO: Que el **segundo indicio** es que mediante fiscalización a cargo de la Sra. María Paz Peña Hernández, ministro de fe de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, se constató que la Empresa Sonorad II S.A., no les está otorgando el trabajo convenido a los dirigentes aludidos.

Que de acuerdo a informe de exposición incorporado en la audiencia de juicio, por la parte demandante y la demandada, resulta claro que doña María Paz Peña Hernández, realizó una fiscalización a la demandada, determinando que no se entregaría el trabajo convenido a Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, por cuanto solo le habrían asignado labores en forma limitada o parcial sin otorgarles las tareas de manejo de dinero, asistencia a las cajeras, responsabilidades de jefatura, entre otras.

DUODECIMO: Que el **tercer indicio** es que la fiscalizadora actuante requirió a la empresa a reintegrar a los trabajadores a sus laborales habituales, otorgándole la función y la empresa no se allanó y ante la negativa se citó a las partes a una mediación.

Que atendido el informe antes referido, es posible establecer que la representante de la empresa demandada, no se allanó a otorgar el total de las funciones que desempeñaban los dirigentes, por lo que se citó a las partes a una mediación.



DECIMO TERCERO: Que el **cuarto indicio** corresponde a la circunstancia de que con fecha 03.03.2023, se llevó a cabo audiencia de mediación entre las partes, con el objeto de obtener la corrección de la vulneración constatada, sin haber concluido en forma positiva, dado que la empresa denunciada no se allanó a poner término a su conducta ilegal. Que de acuerdo al acta de mediación la demandada indica que no existe vulneración de derechos fundamentales, no alcanzando acuerdo.

DECIMO CUARTO: Que sin perjuicio de lo antes referido y atendidas las alegaciones efectuadas por la demandada, como el punto de prueba fijado en autos, a saber la efectividad de haber incurrido la denunciada en la práctica antisindical de no otorgar el trabajo convenido, a juicio de esta juez, debe establecerse el origen de las fiscalizaciones antes referidas y las consecuencias de ello.

DECIMO QUINTO: Que atendido el informe de investigación comisión 1322/2023/452, es posible determinar que Robinson Vera interpuso una denuncia en contra de la demandada, por cuanto debido al cierre de las sucursales Huérfanos y Las Bellotas el día 31 de noviembre de 2022, se dejó sin trabajo a los miembros de la directiva del Sindicato de Empresa Sonorad II S.A., desalojándolos de sus oficinas, sin asignarles otra función y ofreciéndoles volver a sus labores siempre y cuando opten por renunciar a su libertad de horas sindicales, derecho adquirido al igual que la oficina en la cual funciona el sindicato que le hora otorgado por la empresa, requiriéndosela al 31 de diciembre de 2022, sin darle otra de reemplazo.

Que asimismo aparece de dicho informe, que entrevistado el representante de la demandada, este indicó que los trabajadores querían reintegrarse a la sucursal Alameda, lo que se dispuso a partir del día 6 de febrero de 2023, se reintegraran a la empresa.

DECIMO SEXTO: Que también se establece en síntesis del informe de investigación de la comisión 1301/2023/818, que la demandada entregó parcialmente las funciones pactadas a los trabajadores dirigentes sindicales Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, ya que debió repartir las tareas de Tesorería entre ellos y el Tesorero actual de la sucursal Alameda, siendo rechazado por el señor Vera y la señora Vargas. Asimismo aparece que las actividades de Tesorería son realizados por un trabajador,



respecto de aquellas relacionadas con el manejo de dinero y aquellas administrativas son gestionadas a través de un sistema de supervisión central. Además se lee que la sucursal no cuenta con un jefe exclusivo. También se lee que las cajas no reconoce a los dirigentes sindicales como Tesoreros, por no haber sido asistidos por aquellos, además de indicar tanto los señores Vera y Vargas y el Tesorero actual, que la labor de Tesorero no puede ser compartida.

DECIMO SEPTIMO: Que luego de acuerdo a los cartas, correos electrónicos e informes además de la testimonial y declaración de partes, aparece que la demandada cerró con fecha 31 de noviembre de 2022, las sucursales Huérfanos y Las Bellotas, desempeñándose Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, en la primera de ellas, como jefe de cajas y jefe de sucursal respectivamente, remitiéndoles unas cartas por medio del cual se le indica que señalen la sucursal donde continuarían prestando servicios, indicando los trabajadores antes referidos con fecha 6 de enero de 2023, que irían a la sucursal Alameda, estableciendo que la demandada habilitaría el lugar y las claves, por lo que se indicaría a los dirigentes la fecha, la que finalmente se acordó en el comité bipartito de febrero de 2023, quedando de reincorporarse el 6 de febrero de 2023, lo que se materializó en esa fecha.

Qué asimismo, se determina que una vez incorporados los trabajadores antes referidos, no se les entregó la totalidad de las funciones que realizaban en la sucursal Huérfanos, siendo estas funciones de jefe de cajas, toda vez que la señora Vargas, a pesar de ser jefa de sucursal realizaba las actividades del señor Vera.

Que por otra parte, es posible determinar que Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, no marcaban asistencia y que el primero de lo antes referidos, señaló en su denuncia ante la Inspección del Trabajo que tenían libertad de horas sindicales.

Que finalmente, se concluye que se implementó en las sucursales distintas a las que trabajaban Robinson Vera Ahumada y doña Alejandra Vargas Vargas, un sistema de Tesorería, en que las actividades administrativas se desarrollaban a través de un área central.

DECIMO OCTAVO: Que atendido lo señalado de los hechos indicados como fundantes de la acción de prácticas antisindicales, es posible establecer



que Robinson Vera Ahumada y Alejandra Vargas Vargas, son dirigentes sindicales de la demandada, que se desempeñaban como jefe de cajas y sucursal, desempeñándose ambos en la primera de las labores en la sucursal Huérfanos, la cual fue cerrada al igual que la sucursal Las Bellotas, preguntándoles la sucursal a la cual serían trasladadas, el 30 de noviembre de 2022, contestando el 6 de enero de 2023, que a la sucursal Alameda, indicándoles que se les informaría la fecha en la cual se integrarían, acordando finalmente el 6 de febrero de 2023, época en la cual se materializó, ofreciéndoles como funciones las de Tesorería, que se desarrollaría entre el Tesorero existente y los trabajadores antes referidos.

DECIMO NOVENO: Que conforme los hechos que se han dado por establecidos, corresponde determinar si aquellos constituyen a indicios suficientes de una práctica antisindical.

VIGESIMO: Que conforme a la definición que se ha señalado en el motivo sexto de este fallo, a saber acciones que atentan en contra la libertad sindical, entendiéndose por tal aquellas que infringen la constitución de los sindicatos, su libre afiliación y la actividad de las organizaciones sindicales, de los hechos antes referidos, no es posible establecer la existencia de indicios suficientes de una actuación de la demandada, orientada a limitar el ejercicio de la actividad sindical, por cuanto si bien son efectivos los hechos indicados como indicios, tales actuaciones, a saber no otorgar el trabajo convenido al presidente y tesorero del sindicato tercero coadyudante, no corresponden a juicio de esta juez a un acto realizado con el objeto de dificultar la actividad del sindicato, su posterior debilitamiento y finalmente su desaparición, desde que por un lado no está acompañado de alguna otra circunstancia, que permita establecer aquello como único objetivo y por otro parte, de los hechos que se han dado por establecidos, es posible establecer que la falta de entrega del trabajo convenido en forma total, no se realizó con motivo de la calidad de representantes de la organización sindical del señor Vera y la señora Vargas, sino que debido al cierre de la sucursal en la que estos se desempeñaban y el cambio en la organización de la Tesorería, que ya había sido modificada en otras sucursales y no en la de dichos trabajadores, a propósito de su calidad de dirigentes sindicales y la prohibición de alterar la naturaleza de los servicios, además del hecho de realizar la señora Vargas, las actividades en reemplazo



del señor Vera y la eliminación del cargo de jefe de sucursal, que llevo a sólo ofrecerles a los dirigentes antes indicados, desempeñar el cargo de Tesorero con el existente, distribuyendo las tareas entre ellos, no correspondiendo a un mero capricho del empleador, ni menos provocando aquello una limitación al ejercicio de su actividad sindical.

Que en nada altera lo antes referido, el hecho que debieran compartir las labores con el Tesorero existente, por cuanto aun cuando se le hubiera relevado de esa función, la actividad de tal debía ser compartida entre el señor Vera y la señora Vargas, no cumpliendo nuevamente con la entrega de las labores realizadas por ellos, previamente.

Que además de lo anterior y en relación a lo indicado en la demandada, la cual reproducen los informes de exposición, se transcriben unos artículos del Código del Trabajo y escuetamente se indica que la práctica antisindical se produciría por una “discriminación a los dirigentes sindicales”, cabe indicar que en tal denuncia no se indica cómo se produce tal diferenciación, a saber que existieran otros dirigentes sindicales o trabajadores de las sucursales cerradas que se hubieran sido trasladados a otra sucursal, con la entrega de funciones en forma plena ni tampoco se mencionó ni se probó en el proceso, por lo que no puede establecerse la existencia de un trato diferente a los dirigentes sindicales.

Que de esta forma, la constatación de la falta de entrega del trabajo convenido, si bien corresponde a una infracción laboral, por el sólo hecho de afectar a un dirigente sindical, no la transforma en un atentado a la libertad de dichas organizaciones, por cuanto las actividades que poseen tal calidad, deben orientarse a afectar la actividad del sindicato, lo que no ha logrado establecerse del proceso, pudiendo por ende sancionarse como un atentado a los derechos fundamentales de carácter individual o bien como un incumplimiento laboral, pero no conforme la acción revisada, motivo por el cual necesariamente se desestimaré la denuncia de autos.

VIGESIMO PRIMERO: Que los demás medios de prueba rendidos, en autos, en nada altera lo antes resuelto por lo que se omitirá un análisis detallado de los mismos.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 4, 216, 289 y siguientes, 446 a 462 del Código del Trabajo, **SE DECLARA:**



Que **SE RECHAZA** la demanda de autos interpuesta por **DIRECCIÓN DEL TRABAJO- INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO** en contra de **SONORAD II S.A.**, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: S-17-2023

RUC: 23-4-0465026-2

Dictada por doña **ANGELICA PEREZ CASTRO**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

